

AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Comunidad de Madrid

Exp.: A/SER-018490/2021

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.

Unidad administrativa:

ÁREA DE CONTRATACIÓN

Resolución de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, por la que se dispone la imposición de una penalidad económica en el contrato titulado “**Servicio de vigilancia y seguridad de las dependencias e instalaciones del Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid**”

De conformidad con lo establecido en los artículos 192.1 y 194 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP), en relación con el artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y demás disposiciones de aplicación, en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes, y en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. - Mediante orden de 21 de febrero de 2021, la empresa ALCOR SEGURIDAD, S.L. (NIF B27382175) resultó adjudicataria del contrato titulado “Servicio de vigilancia y seguridad de las dependencias e instalaciones del Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid”. El contrato se formalizó el 29 de marzo de 2022, con un plazo de ejecución de 24 meses desde el día siguiente a la formalización del contrato.

El contrato ha sido prorrogado en varias ocasiones, hasta las 12:00 horas del 28 de febrero de 2025 (o hasta que se formalice el contrato derivado del expediente A/SER-012305/2023), en la actualidad en licitación).

Segundo. – Por resolución de 12 de septiembre de 2024, y a propuesta de la Dirección General de Seguridad, se incoa procedimiento de determinación de responsabilidades por ejecución defectuosa del contrato, dada la comisión de hasta siete incumplimientos por parte de la empresa contratista, como consecuencia de numerosos descubiertos en el servicio, durante los meses de junio y julio de 2024, todos ellos incluidos en el informe de la Subdirección General del Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE), de 30 de julio de 2024.

Tercero. – Notificada la resolución de inicio del procedimiento, el 20 de septiembre de 2024, ALCOR SEGURIDAD presenta alegaciones, en las que manifiesta desconocer cómo han sido corroborados los descubiertos, solicitando la incorporación al expediente de la documentación en la que se fundamentaba la comprobación de las infracciones, para poder ejercer su derecho a la defensa. Asimismo, manifestaba la desproporción de la sanción propuesta.

Cuarto. - El 18 de octubre de 2024 se realiza nuevo trámite de audiencia, en el que se remite informe de 14 de octubre de la Subdirección General del IFISE, en el que se incluyen, como anexo, copia de la totalidad de los documentos acreditativos de los descubiertos en el servicio.

Quinto. - Con fecha de 28 de octubre de 2024, tiene entrada escrito de alegaciones de la empresa, en el que sigue afirmando desconocer cómo han sido corroborados los descubiertos y manifestando que sólo se han aportado los partes de servicio firmados por sus vigilantes, poniendo en cuestión únicamente los descubiertos de los días 15 y 22 de julio de 2024 y reiterando la desproporcionalidad de las penalidades propuestas, sin fundamentar ninguna de ambas afirmaciones.

Quinto. – Con fecha de 18 de noviembre de 2024, la Subdirección General del IFISE reitera las conclusiones de su informe de 14 de octubre de 2024.

A los anteriores hechos, le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. - De conformidad con lo dispuesto en el art. 192.1 de la LCSP, se propone la imposición de una penalidad por incumplimiento defectuoso del contrato. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y la cuantía no podrá ser superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido.

En caso de no cubrir el importe de la penalidad los daños causados a la Administración, esta podrá exigir al contratista una indemnización por daños y perjuicios, de conformidad con lo establecido en el art. 194 de la LCSP.

Segundo. - A tenor de lo establecido en el apartado 21 de la cláusula primera del pliego de prescripciones técnicas particulares que rige el contrato, corresponde una penalidad

- “En caso de haber ofertado el compromiso de tiempos de respuesta ante situaciones de ausencia menor de 30 minutos, desde el comienzo del turno; por el retraso en la sustitución de personal por necesidad sobrevenida superior a 30 minutos, se aplicará una penalización del 5% del importe de la mensualidad en que se produzca.”

De acuerdo con el acta de la Mesa de contratación de 1 de diciembre de 2021, ALCOR SEGURIDAD, S.L. incluye en su proposición el compromiso de tiempos de respuesta ante situaciones de ausencia menor de 30 minutos desde el comienzo del turno, obteniendo 4 puntos por ello.

- “No ejecución superior a 15 horas semanales del horario exigido sin la autorización expresa del IFISE”. Tipificado como incumplimiento muy grave, correspondiendo imponer una penalidad del 5% del precio del contrato.
- “No ejecución de 11 a 15 horas semanales del horario exigido sin la autorización expresa del IFISE”. Tipificado como incumplimiento grave, correspondiendo la imposición de una penalidad del 3% del precio del contrato.

Tercero. – En el escrito de alegaciones de 25 de octubre de 2024 ALCOR SEGURIDAD, S.L. manifiesta desconocer cómo se han corroborado los descubiertos, poniendo en cuestión, únicamente, los de los días 15 y 22 de julio de 2024, y afirma que sólo se le han facilitado los partes de servicio. Alega, asimismo, la desproporción de la penalidad propuesta.

Cuarto. - De acuerdo con la documentación obrante en el expediente, queda acreditada la constatación de los descubiertos por diversos medios de prueba. Tanto los partes de servicio del personal de la empresa de vigilancia, como los informes del supervisor de seguridad y los estadillos de control de llamadas del Servicio de Seguridad de la Comunidad de Madrid.

Las alegaciones de la interesada no desvirtúan, en modo alguno, los descubiertos ocasionados. Respecto de lo manifestado por esta, el descubierto del 15 de julio de 2024, queda acreditado por el informe del supervisor de seguridad y en el estadillo de control de llamadas del Servicio de Seguridad de la Comunidad de Madrid. El del 22 de julio de 2024, por el informe del supervisor de seguridad, el parte del vigilante de seguridad y el estadillo del control de llamadas.

Respecto de la proporcionalidad de la sanción propuesta, esta se ajusta a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, tal como se refleja en el informe de la unidad promotora de 30 de julio de 2024, sin que la interesada haya presentado motivo o razonamiento alguno que fundamente la supuesta desproporción.

Por todo lo anterior,

DISPONGO

Imponer a la empresa ALCOR SEGURIDAD, S.L. (NIF B27382175), adjudicataria del contrato titulado “Servicio de vigilancia y seguridad de las dependencias e instalaciones del Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid”, una penalidad económica por importe de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS Y SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (135.316,69 €).

De acuerdo, con el apartado 21 de la cláusula primera del pliego de cláusulas administrativas particulares, se hará efectiva mediante deducciones de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que se hubiera constituido cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

P.D. Resolución de 27 de noviembre de 2023 (BOCM 04/12/2023)

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD

Firmado digitalmente por: GONZALEZ MORATO LUIS MIGUEL
Fecha: 2024 12 16 13:26

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ambos plazos contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.